

Latinoamérica desde arriba

#1
Noviembre 2024

Poder y democracia: la influencia de las élites económicas

PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO

Gabriel Vommaro
Paulo Roberto Neves Costa
Silvana Zulmira Ferreira
Marta Pontes de Campos
Marina Mendoza
Francisco Robles Rivera
Alheli Vanessa Bermudez Laynes

Boletín del
Grupo de Trabajo
**Élites económicas,
estado y desigualdad**



Latinoamérica desde arriba no. 1 : poder y democracia : la influencia de las élites económicas / Gabriel Vommaro ... [et al.] ; Editado por María Laura Farías ... [et al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2024.

Libro digital, PDF - (Boletines de grupos de trabajo)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-813-938-8

1. Democracia. 2. Capitalismo. 3. Dictadura. I. Vommaro, Gabriel II. Farías, María Laura, ed.

CDD 320.8

PLATAFORMAS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Colección Boletines de Grupos de Trabajo

Director de la colección - Pablo Vommaro

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial

Equipo

Natalia Gianatelli - Coordinadora

Cecilia Gofman, Marta Paredes, Rodolfo Gómez, Sofía Torres,

Teresa Arteaga y Ulises Rubinschik

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina.

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875

<clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Coordinadores del Grupo de Trabajo

Florencia Luci

Instituto de Investigaciones Gino Germani

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires

Argentina

florluci@gmail.com

Francisco Robles-Rivera

Instituto de Investigaciones Sociales

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

francisco.robles@ucr.ac.cr

Miguel Serna

Departamento de Sociología

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de la República

Uruguay

miguel.serna@cienciassociales.edu.uy

Editoras del Boletín #1

María Laura Farías

Victoria Gessaghi

Florencia Luci

Inés Nercesian





Contenido

5 Introducción

ARTÍCULOS

8 Los empresarios argentinos (otra vez) en busca de una democracia a medida

Gabriel Vommaro

19 A Odebrecht na Operação Lava Jato

Elite econômica, corrupção e democracia no Brasil

Paulo Roberto Neves Costa
Silvana Zulmira Ferreira
Marta Pontes de Campos

32 Perú: una democracia capturada

Marina Mendoza

42 Capitalismo y dictadura

Élites en Nicaragua

Francisco Robles Rivera
Alheli Vanessa Bermudez Laynes

MISCELÁNEAS

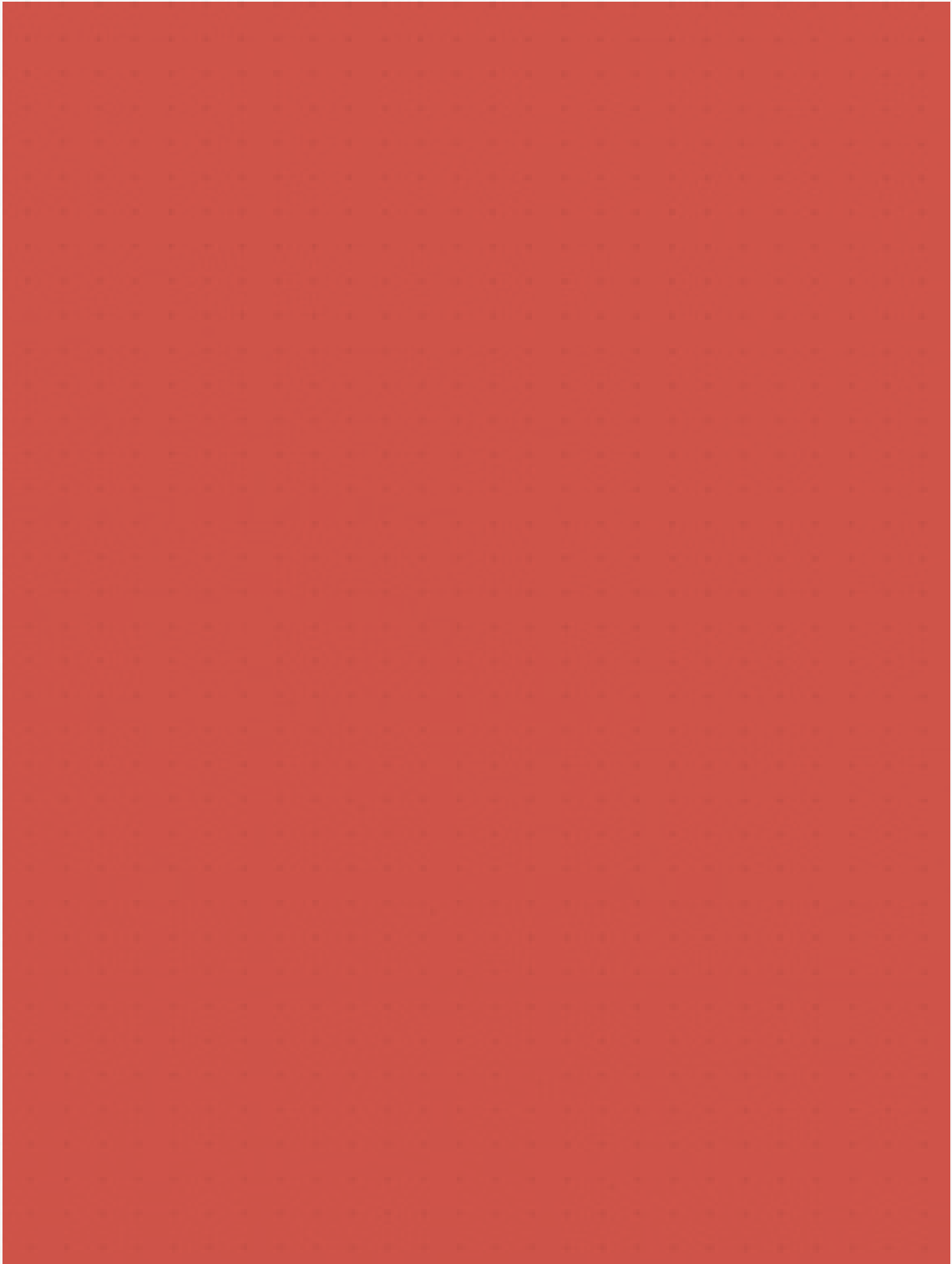
50 Élites en la nube

53 Libros y literatura

57 Coyuntura en la red

El triunfo de Donald Trump abrió la discusión: ¿las élites están traicionando a la democracia?





Latinoamérica desde arriba
Número 1 • Noviembre 2024



Introducción

Bienvenidas y bienvenidos al primer número de *Latinoamérica desde arriba*, el boletín del Grupo de Trabajo CLACSO *Élites económicas, Estado y desigualdad*

Desde este espacio, queremos abrir una ventana para observar y discutir a “los que mandan” en nuestra región: esas élites económicas y políticas cuya influencia define buena parte del rumbo de nuestras democracias. Sabemos que el estudio del poder no es nuevo, pero en América Latina adquiere una urgencia particular frente a la desigualdad creciente y los desafíos que enfrentan nuestras sociedades. Este boletín nace con la intención de sumar nuestras investigaciones y reflexiones a un debate que no puede quedar en el ámbito académico.

En esta primera edición, les traemos cuatro artículos que analizan cómo las élites económicas inciden en los procesos democráticos de Argentina, Brasil, Perú y Nicaragua. ¿Qué sucede cuando el poder económico condiciona las políticas del Estado? ¿Cómo se entretajan las agendas de los sectores dominantes con los marcos democráticos? Estos textos buscan aportar claves para entender esas relaciones, muchas veces invisibles pero decisivas, que moldean nuestras sociedades.

Además, preparamos una sección con propuestas editoriales, notas de prensa, información sobre observatorios y redes de estudio, podcasts y otros recursos. Todo pensado para quienes quieren seguir de cerca el pulso del poder en América Latina.

Queremos que este boletín sea también un espacio de intercambio, así que les invitamos a compartir sugerencias, comentarios o ideas en nuestro correo: gtelites@gmail.com.

Gracias por acompañarnos en este primer vuelo por las alturas de Latinoamérica. ¡Nos leemos!

ARTÍCULOS

Latinoamérica desde arriba
Número 1 • Noviembre 2024



Los empresarios argentinos (otra vez) en busca de una democracia a medida

Gabriel Vommaro*

“Una oportunidad histórica”. Así tituló la Asociación Empresaria Argentina (AEA) un comunicado del 21 de diciembre de 2023, mostrando su entusiasmo por el ciclo que se abría a pocos días de la asunción del ultraderechista Javier Milei como presidente. Un día antes, el nuevo gobierno había dado a conocer un decreto de necesidad y urgencia titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” en el que, a partir de los considerandos habituales en los cambios de ciclo político en Argentina -es decir, enfatizando la herencia económica negativa y esgrimiendo la amenaza de caos económico-, se proponía una desregulación radical de la economía a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes, entre ellas las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, la flexibilización del mercado laboral y la puesta a disponibilidad de empresas públicas para su privatización. El carácter ambicioso del decreto entusiasmó a la principal asociación empresaria de Argentina. Fundada en 2002, AEA reúne a los titulares de las principales empresas del país. En consonancia con sus objetivos originales, asociados con la promoción del “desarrollo económico y social de la Argentina desde la perspectiva empresarial privada, con especial énfasis en el fortalecimiento de las instituciones necesarias para tal fin” (cf. <https://www.aeanet.net/aea>).

* Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Técnicas (CONICET) con sede en la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Élites económicas, Estado y desigualdad.

html), AEA se había propuesto mejorar la capacidad de coordinación del empresariado argentino, caracterizado por su fragmentación y sus estrategias de defensa de intereses sectoriales y de corto plazo (Schneider, 2004). En esa búsqueda, la cuestión institucional siempre estuvo en el corazón de su discurso. De hecho, buena parte su programa de oposición al peronismo kirchnerista, que con una orientación de centroizquierda gobernó entre 2003 y 2015, se ancló en las demandas de seguridad jurídica y mejora de la calidad institucional. En la misma línea, poco antes de la primera vuelta de las presidenciales de 2023, la entidad se había pronunciado por “el pleno respeto a las instituciones de la República consagradas en nuestra Constitución Nacional” y “la extraordinaria relevancia del principio constitucional de la división de poderes, de contar con una Justicia independiente, así como de garantizar la libertad de expresión”¹.

Sin embargo, pocos meses después, con la asunción del primer presidente libertario de la historia argentina, los grandes empresarios hacían, como se dice, la vista gorda de los problemas institucionales y constitucionales que generaba el primer decreto presidencial, que buscaba modificar sin consenso parlamentario ámbitos tan diversos como la protección del medio ambiente, los derechos laborales y la provisión de servicios públicos básicos. Estas irregularidades llevaron a que buena parte de sus artículos fueran rechazados por diversas instancias judiciales.

Ciertamente, la situación argentina tiene una cierta dimensión de novedad y excepcionalidad. Milei llegó al poder de manera inesperada, con un vehículo electoral débil y, a pesar de ello, logró limar las bases de la estructura bicoalicial de la competencia que se había establecido desde 2015, cuando al “giro a la izquierda” del peronismo se agregó la conformación de una coalición competitiva de centro-derecha (dominada por el nuevo partido Propuesta Republicana, PRO), que ganó las elecciones de ese año. También reviste novedad la radicalidad del discurso económico

1 Cf. <https://www.infobae.com/economia/2023/09/09/duro-comunicado-de-la-asociacion-empresaria-argentina-sin-empresas-no-hay-pais/>

de Milei, su abierta impugnación de ciertos consensos en materia de intervención del Estado y de financiamiento público, así como el ascenso, de la mano del líder libertario, de figuras asociadas con el conservadurismo más rancio y con el pasado autoritario del país (Vommaro, 2023). Asimismo, la performance populista -su crítica furibunda a la “casta” política- y rupturista de las “buenas costumbres” institucionales conmocionó a observadores y profesionales del comentario político. Sin embargo, a partir de la poca perspectiva que permite el análisis del tiempo presente, el comportamiento empresario en relación a este nuevo ciclo revisa menos novedad y se inscribe más claramente en la historia reciente de la relación entre el mundo de los negocios y la política en Argentina. Aquí me gustaría enfatizar que el entusiasmo actual del empresariado es el corolario de su larga marcha en la consecución de un programa reformista pro-mercado con apoyo popular, luego del ciclo posneoliberal en el que sus ideas y sus intereses habían quedado en minoría en la arena electoral. Y que, en el período actual, se asienta sobre una novedad -la popularidad de algunas de sus ideas- para obtener beneficios de corto plazo, en una repetición del cortoplacismo que los estudios identificaron en el comportamiento empresario argentino. Para argumentar esta continuidad, en las páginas que siguen desarrollo brevemente tres elementos centrales que ayudan a entender por qué el momento actual, en este terreno, es menos excepcional que en otros.²

La ruptura con el peronismo: huir de Chávez para caer en manos de Milei

La relación de los empresarios con el peronismo fue históricamente conflictiva. La débil burguesía nacional edificada desde la incipiente industrialización de los años treinta y fortalecida en su interlocución con el Estado durante los dos primeros gobiernos de Juan D. Perón formó parte de

² Para profundizar en los dos primeros puntos puede consultarse (Vommaro, 2017) y (Gené y Vommaro, 2023), de donde provienen buena parte de los argumentos aquí presentados.

lo que Guillermo O'Donnell (1977) llamó “alianza defensiva” –que tenía a los empresarios industriales orientados al mercado interno en coalición con las clases populares–, en tanto que la “alianza exportadora” –conformada por sectores agrarios y los industriales vinculados al mercado externo– se opuso más o menos abiertamente, según el período, al programa histórico del peronismo en materia económica, que combinaba promoción de la producción industrial y del consumo interno.

Con el gobierno de Menem, el giro neoliberal de su política económica, la apertura de importaciones, las privatizaciones y otras reformas orientadas al mercado mostraron que el peronismo podía ser, antes que una amenaza, un aliado eficiente de los intereses de las élites económicas (no solo del sector orientado al mercado interno, sino de sus fracciones más concentradas e internacionalizadas) (Gibson, 1997; Sidicaro, 2002). Pequeños partidos políticos conservadores, *think tanks* neoliberales e intelectuales y publicistas al servicio de las causas promercado se plegaron al gobierno de Menem, ocuparon lugares en la función pública y hasta establecieron alianzas electorales con el peronismo. El empresariado argentino, carente de un partido conservador competitivo, había encontrado un vehículo electoral para representar sus intereses.

Sin embargo, la crisis de 2001-2002 cambiaría las cosas. Terminaría de lesionar el consenso social neoliberal de la década anterior y ofrecería una oportunidad para la reconstrucción de una coalición sociopolítica prodistributiva con pretensión de reactivar el mercado interno, una vez más encabezada por el peronismo. Con ello, se gestarían las condiciones para un nuevo enfrentamiento entre el mundo de los negocios y ese movimiento. En efecto, la llegada al gobierno de Néstor Kirchner dio un nuevo giro económico en el peronismo, dando impulso al consumo interno e intensificando el fortalecimiento del poder del Estado –con la centralización de decisiones y el aumento de la intervención en diferentes terrenos, incluida la decisión de colocar bajo control del Estado actividades que en la década previa se habían transferido al sector privado, como el sistema jubilatorio (Freytes, 2013). Pronto, la confrontación con algunos

sectores empresarios, en especial los exportadores, comenzaron a hacerse visibles, hasta llegar a un conflicto abierto; aunque ello ocurrió recién hacia el final del segundo gobierno de la sucesora de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner.

Dos hitos fueron centrales en la agudización de ese enfrentamiento. El primero fue el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los empresarios agrarios iniciado con la Resolución 125 del Ministerio de Economía, que instituía un régimen de derechos de exportación variable en función del precio internacional de los granos. La oposición a esta resolución ministerial -que los empresarios agrarios consideraban “confiscatoria”- escaló hasta convertirse en el factor aglutinador de la oposición política y social al gobierno kirchnerista. En torno a ese conflicto se establecieron buena parte de las coordenadas de la polarización política que organizaría las pasiones en Argentina hasta 2023: se forjarían en paralelo, las épicas kirchnerista y antikirchnerista. El segundo hito fue el cambio en la política económica y en las élites de gobierno que tuvo lugar al inicio del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado, se establecieron controles de acceso a divisas y se reforzaron los controles para la importación (Novaro, 2019). Esto amplió el descontento en el empresariado, hasta que la distancia con el gobierno se volvió casi generalizada, incluso en el caso de los industriales. Por otro lado, se produjo un reemplazo de las élites de gobierno que el kirchnerismo había empleado en el área económica por jóvenes profesionales alineados directamente con la presidenta y su movimiento, que acompañaron los nuevos controles con un agitado discurso de disciplinamiento de las élites. En este contexto, la llegada habitual a los funcionarios del área económica que tenían los empresarios se vio obstaculizada. Los empresarios entendieron que el horizonte político volvía a ser de amenaza.

En esos años, la AEA fue el gran organizador de la oposición al kirchnerismo y encabezó el intento más consistente de coordinación de los diferentes sectores empresarios contra el gobierno. A partir de 2008, mantuvo la primacía en la dirección del proceso de movilización empresaria hacia

el polo opositor y en la definición de un programa basado en tres pilares: “funcionamiento transparente de los mercados”, “respeto de los derechos de propiedad” y de la “libertad de expresión” (Novaro, 2019: 348 y ss.). La influencia del grupo de multimedios Clarín en este último punto era evidente. El énfasis en la defensa de la propiedad privada estaba asociada a una creciente percepción de amenaza redistributiva y estatista ligada al kirchnerismo, que terminó por plasmarse en la idea de que la Argentina iba camino a “convertirse en Venezuela” (Vommaro, 2017).

El peronismo, que había sido el partido del orden en los años 1990 y que organizó también una salida política relativamente pacífica a la crisis de 2001 y 2002, se volvió en su faz kirchnerista protagonista de la amenaza de “chavización” de Argentina. El regreso del peronismo al poder en 2019 volvió a dividir a los empresarios. Buena parte de los industriales volvieron a acercarse a la nueva coalición, que incluía a peronistas no kirchneristas y prometía retomar la orientación favorable al consumo interno. La ruptura de 2015, que entonces parecía definitiva, fue suturada con mayor rapidez de la esperada. En parte, porque durante todo 2019 los líderes del kirchnerismo buscaron recomponer sus relaciones con las élites económicas, en parte porque tanto el candidato presidencial Alberto Fernández como Sergio Massa, los otros socios de peso en la nueva coalición peronista, operaron para recomponer la relación entre peronismo y empresarios.

Pero otros sectores ya habían iniciado un camino que parecía definitivo. Las entidades empresarias del agro, en especial las que agrupan a grandes productores, mantuvieron una breve tregua con el nuevo gobierno peronista, pero pronto comenzaron a mostrar sus posiciones abiertamente opositoras. Lo mismo sucedió con el sector financiero y con el gran empresariado de AEA, que ahora incluía también a empresarios abiertamente alineados con la centroderecha, como el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín y uno de los socios de la tecnológica Globant, Martín Migoya. Asimismo, el mal desempeño económico del peronismo, otra vez en el gobierno, sus crisis y divisiones internas, así como un nuevo

giro del kirchnerismo hacia posiciones abiertamente críticas de las élites económicas, crearon nuevas condiciones para que el empresariado volviera a buscar en la oposición de centro-derecha una opción electoral para 2023. Al final del gobierno de Fernández, un peronismo caótico en la arena económica y desorganizado políticamente (también) perdió respeto del mundo empresario.

El fracaso de la apuesta partidaria y la llegada inesperada del hombre providencial

El enfrentamiento con el peronismo kirchnerista y el surgimiento de un partido competitivo de centroderecha (PRO) abrieron una oportunidad para que los grandes empresarios argentinos tomaran una posición más abierta en cuestión de adhesiones partidarias. Sin embargo, aunque AEA apostó por la candidatura del líder del PRO, Mauricio Macri, como parte de la coalición Cambiemos, la relación entre los grandes empresarios y el nuevo partido estuvieron lejos de ser orgánicas y permanentes. Por un lado, el propio PRO privilegió el reclutamiento individual de empresarios a través de sus fundaciones y organizaciones para-partidarias (Vommaro, 2017). La desconfianza con las mediaciones corporativas del mundo de los negocios fueron una marca de origen del nuevo partido. Por otro lado, una vez en el gobierno, Macri y sus funcionarios privilegiaron la relación con empresarios tecnológicos exitosos -dueños de los llamados “unicornios”, por tener un valor de mercado de más de un billón de dólares- y mantuvieron la distancia con AEA y otras asociaciones empresarias dispuestas a tener un apoyo más abierto y entusiasta con el nuevo gobierno. Así, los cuatro años de gobierno dejaron un saldo bastante pobre en cuanto al fortalecimiento de la coordinación entre la coalición electoral promercado y su base de apoyo socioeconómica. Es cierto que la retórica emprendedora del gobierno y su épica de origen, asociada a proveer una salida a la amenaza encarnada en el peronismo kirchnerista, tuvo efectos en una porción del empresariado que, por así decirlo, salió del clóset y, como en los años noventa, volvió a pregonar públicamente

las virtudes de una sociedad de mercado contra el “engaño populista”. El programa promercado volvía a tener un lugar en la arena electoral y a ser defendido abiertamente en la esfera pública. En este sentido, el fortalecimiento de una coalición electoral promercado competitiva fue uno de los principales legados que dejó el gobierno de Macri para el empresariado. Y aunque no haya logrado llevar a cabo la agenda reformista que prometió, el apoyo de los sectores más ideológicos al PRO se mantuvo por un tiempo. Sin embargo, el fracaso del intento reformista del gobierno de Macri produjo disgregación en los intereses y opciones de buena parte del empresariado. En las elecciones de 2019, los sectores más pragmáticos, que suelen jugar a varias puntas en el terreno electoral, mantuvieron sus puentes con la coalición promercado, pero no dejaron de cultivar relaciones con el peronismo.

El escenario cambió en 2023. La aparición de Milei causó primero prudencia y distancia en el mundo empresario. Frente a la opción de centro-derecha dominada por el PRO, Milei aparecía como una opción ciertamente más utópica pero también más incierta. Su crecimiento electoral, primero, y su inesperado éxito en las primarias de agosto de ese año, y en la primera vuelta de octubre, luego, obligaron a los empresarios a revisar sus preferencias. La extrema derecha se volvió una opción viable. La enseñanza del gobierno de Macri era que el “gradualismo” -una forma local de llamar a una estrategia de reformas graduales, que buscaban tener consenso social- no podía ser exitoso. Aunque difirieran en las velocidades que se requieren para llevar a cabo la agenda promercado, todos los sectores empresarios esperaban que un futuro gobierno conservador fuera “más a fondo”. La sorpresa electoral los arrojó a los brazos de quien prometía “romper todo”. A diferencia de lo sucedido en 2015, cuando el PRO intentó organizar la salida a la situación de amenaza vivida por los empresarios frente al kirchnerismo, en 2023 Milei fue una salida inesperada. Muy pronto, se transformó en el camino deseable. Su modelo decisionista, endeble en términos institucionales, populista en su retórica y dispuesto a pasar por encima consensos sociales en función de sus objetivos económicos, obligó también a rever las demandas “institucionales”

del gran empresariado. El nuevo gobierno libertario logró muy pronto ordenar con su programa al mundo de los negocios, que no encontraba su camino. Al mismo tiempo, ofreció un sendero caótico, poco institucionalizado, que augura un horizonte imprevisible en cuanto a su continuidad.

¿Oportunidad histórica o eterno retorno al cortoplacismo?

La “oportunidad histórica” que AEA vio en el gobierno de Milei hunde así sus raíces en esta historia reciente de enfrentamientos entre el empresariado argentino y los actores políticos nacionales, así como de fracasos en imponer el proyecto promercado por la vía electoral luego del derrumbe del ciclo neoliberal. Argentina tiene ahora opciones políticas competitivas de derecha. Hay un electorado conservador dispuesto a apoyar programas promercado, incluso de los más radicales. Eso cambia las cosas respecto de la situación que deploraba Di Tella en su ensayo de 1971, en el que señalaba que una de las causas de la inestabilidad política argentina era la ausencia de un partido que representara abiertamente los intereses de las élites económicas. Sin embargo, en otro aspecto central, otro ensayo de la misma época (O’Donnell, 1977) permite iluminar las continuidades del comportamiento empresario, sus patrones históricos arraigados. Visto en esa perspectiva, el actual ciclo se parece bastante a la historia del péndulo entre la coalición defensiva y la coalición exportadora que estudió O’Donnell en los años 1970. Tras el fracaso flagrante de la primera en el período 2019-2023, queda más claro aún que, como señalaba O’Donnell, no hay empate hegemónico sino un ida y vuelta entre períodos de predominio de unos y otros. No obstante, en este vaivén el empresariado logra ventajas de corto plazo que pueden ser revertidas solo parcialmente, como lo mostró el ciclo posneoliberal.

La “oportunidad histórica” de llevar a cabo su programa económico de manera más plena y radical, aun a riesgo de que la estrategia institucional -basada en el poder del ejecutivo y en una estrategia de polarización

permanente- otorgue un carácter cortoplacista y endeble a esas medidas, permite obtener ventajas a las élites económicas en términos de distribución del ingreso y beneficios para actividades económicas extractivas, entre otros elementos. En el trípode que AEA había defendido en los años de predominio kirchnerista -recordemos: “funcionamiento transparente de los mercados”, “respeto de los derechos de propiedad” y la “libertad de expresión”-, como en otros tiempos, la última opción es por los derechos de propiedad (Durand y Silva, 1998). La democracia a medida del mundo de los negocios es, hasta que un nuevo ciclo de la alianza defensiva la revierta parcialmente, posible; más ahora que los intereses empresarios tienen poderosos representantes en la arena electoral. Pronto se escribirá sobre sus legados en términos sociales y económicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Durand, Francisco, & Silva, Eduardo (Eds.). (1998). *Organized business, economic change, and democracy in Latin America*. Miami: North-South Center Press.
- Freytes, Carlos (2013). “Empresarios y política en la Argentina democrática: actores, procesos y agendas emergentes”. *Revista SAAP*, 7(2), 349-363.
- Gené, Mariana, & Vommaro, Gabriel (2023). *El sueño intacto de la centroderecha: y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Gibson, Edward (1996). *Class and Conservative Parties: Argentina in Comparative Perspective*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Novaro, Marcos (2019). *Dinero y poder: las difíciles relaciones entre empresarios y políticos en la Argentina*. Buenos Aires: Edhasa.
- O'Donnell, Guillermo (1977). “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”. *Desarrollo Económico*, 16(64): 523-554.
- Schneider, Ben Ross (2004). *Business Politics and the State in Twentieth-century Latin America*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Sidicaro, Ricardo (2002). *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-1955, 1973-1976, 1989-1999*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Vommaro, Gabriel (2017). *La larga marcha de Cambiemos*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Vommaro, Gabriel (2023). *La ultraderecha en Argentina: entre el oportunismo y la innovación de Milei*. Santiago de Chile: FES.

Vommaro, Gabriel y Wills-Otero, Laura (2021). "Businesspeople Mobilization in Conservative Parties During the Left Turn. The Political Effects of the 'Venezuela Model' Threat". Ponencia en Repal Annual Meeting, Cornell University.a





A Odebrecht na Operação Lava Jato

Elite econômica, corrupção e democracia no Brasil

Paulo Roberto Neves Costa*

Silvana Zulmira Ferreira**

Marta Pontes de Campos*** ****

O que a análise dos depoimentos de empresários da Odebrecht envolvidos na Operação Lava Jato contribuíram para compreensão da forma como eles entendiam, avaliavam e justificavam suas práticas assumidamente ilegais a respeito das suas relações com a política, os políticos e as instituições do regime democrático? O que a descrição dessas práticas, na condição de réus, investigados ou testemunhas, revelam sobre a relação entre elite econômica, corrupção e o funcionamento da democracia

* Departamento de Ciência Política, Universidade Federal do Paraná-Brasil. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Élités económicas, Estado y desigualdad.

** Mestranda em Sociologia, Universidade Federal do Paraná-Brasil.

*** Doutoranda em Ciência Política, Universidade Federal do Paraná-Brasil. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Élités económicas, Estado y desigualdad.

**** Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio aos projetos de pesquisa subjacentes a este texto. Nosso agradecimento também à Universidade Federal do Paraná e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que também apoiou esta pesquisa através do Projeto Capes-Print. Esse texto está baseado no capítulo Businessmen, Political Financing, and Corruption: Odebrecht in Operation Car Wash, publicado em TROMBINI, M. E. et al. (Eds.). *The Fight against Systemic Corruption-Lessons from Brazil (2013-2022)*. Springer, 2024. Acesso: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-43579-0>

brasileira? E o que isso levanta em relação ao enfrentamento desta questão, que está longe de ser exclusiva do Brasil? Tratar dessas questões é o objetivo deste texto.

A Operação Lava Jato (OLJ) é a mais complexa e impactante investigação relacionada a práticas ilegais na relação entre empresas e política até este momento na história brasileira. Entre os investigados estavam dirigentes de importantes empreiteiras, os quais admitiram seu envolvimento com tais práticas e produziram relatos sobre elas. Inicialmente criada para investigar crimes contra o sistema financeiro praticado por doleiros, a OLJ, acabou contemplando desde crimes contra o erário público e de lavagem de dinheiro, até algo que seria um complexo esquema de pagamento de propinas e o financiamento ilegal de partidos e políticos que pertenciam a um amplo espectro partidário e atuavam em todos os níveis do sistema político brasileiro.

Diante da amplitude de questões relacionadas à OLJ, o problema de pesquisa que nos guiou é a *representação* produzida pelos empresários da Odebrecht e envolvidos na OLJ a respeito da questão do financiamento político e mais particularmente de campanha, legal e/ou ilegal. Enfim, trata-se de verificar como a democracia funcionava, porém do ponto de vista desses empresários, e em uma situação de reconhecida e assumida ilegalidade, portanto, na condição de réus. Assim, esta *representação* remete não meramente a um conjunto de ideias, valores ou proposições normativas e prescritivas, mas também a uma dimensão relevante da *definição* e da *justificação* das *ações concretas*, no caso, relativas à defesa de interesses através do financiamento político ilegal. Em um dos documentos, Marcelo Odebrecht remete ao que entendemos por *representação*: a “... maneira que nós racionalizávamos”.

Esta análise foi feita a partir de três categorias, que implicam em três diferentes aspectos dessa *representação*:

1. Sobre a *cultura gerencial da empresa*: se refere aos *princípios, diretrizes, critérios e valores* relativos à forma como a empresa administrava internamente as práticas ilegais relacionadas ao financiamento político. Portanto, na maior parte das referências à *cultura gerencial* há também uma referência à ação propriamente dita da empresa, ou seja, o que guiava o que ela fazia;
2. Sobre o *formato institucional*: visa localizar a *representação* acerca dos *aspectos institucionais* e as *particularidades organizacionais internas* que a Odebrecht constituiu para administrar e dar conta das questões e desafios relacionados ao âmbito externo. Isso é relevante porque diz respeito às *ações internas à organização*, adotadas para tratar de sua relação com uma dimensão relativa ao regime político, no caso, o financiamento político ilegal, a qual, por sua vez, era parte muito importante de suas estratégias de defesa de seus interesses;
3. Sobre a *cultura política*: diz respeito ao modo como os empresários descrevem, analisam e avaliam a política, o processo eleitoral, o processo decisório, o sistema político e suas instituições e atores, inclusive a si próprios como atores políticos. Isso nos permite analisar como era pensado o funcionamento da democracia no Brasil, a partir especificamente da questão do financiamento político.

Os documentos analisados estiveram sujeitos à dinâmica e aos objetivos dos *operadores da Justiça*, a saber, os responsáveis pelas investigações, os procuradores, o juiz e os advogados de defesa, e aos interesses dos próprios depoentes. Como é sabido, existem questionamentos sobre os procedimentos dos procuradores da OLJ e da Justiça que tiveram e ainda poderão ter desdobramentos importantes no meio jurídico e político no Brasil. Envolvendo tanto o Ministério Público Federal quanto o então Juiz Sérgio Moro, existem questionamentos legais sobre a parcialidade e a ilegalidade dessas ações.

Não buscamos em tais documentos uma descrição fidedigna de como se deram os fatos, nem a “*verdade*” que interessaria aos investigadores e julgadores, ou mesmo à opinião pública e à imprensa. Trata-se, portanto, de uma validade *sociológica*, e não da “*verdade*” ou validade jurídica, embora aquela se beneficie das particularidades das condições em que se encontravam os depoentes. Esta *validade* foi aqui buscada em discursos que dificilmente poderiam ser produzidos em outras condições de pesquisa, dado o seu conteúdo fundamental, ou seja, práticas ilegais, e a partir dos quais podemos analisar de forma muito particular a relação entre elites econômicas, ou seja, o poder econômico, e a política.

Em relação à *cultura gerencial da empresa*, segundo Marcelo Odebrecht, desde o final dos anos 1980, a empresa fazia pagamentos não contabilizados para políticos e partidos, o *Caixa 2*. Mas, nos anos 1990, teria ocorrido uma mudança nesta *cultura*, quando a empresa teria deixado de usar notas frias e contratos fictícios e passou a separar recursos de pagamentos não contabilizados. O próprio Marcelo se refere a isso como uma mudança no gerenciamento administrativo da empresa, e as suas declarações foram fundamentais, no caso, para tratar da *representação* acerca da *cultura gerencial da empresa* referente às práticas ilegais.

Um primeiro aspecto é o esforço em diferenciar o *Caixa 2* de “propina”, presentes nas declarações sobre os pagamentos não contabilizados envolvendo autoridades e partidos políticos. Reforçamos que não estamos nos reportando diretamente aos fenômenos e processos históricos, mas sim à forma como os indivíduos do grupo aqui considerado os descrevem, analisam, avaliam e justificam suas ações. Poderíamos considerar que esta distinção estava relacionada à estratégia dos advogados de defesa, ao tentar caracterizar as práticas ilegais como *Caixa 2*, um ilícito menos grave e mais impreciso do que o crime de corrupção ativa, que seria o caso da propina quando envolve agentes públicos ou autoridades políticas. Mas, o discurso de Marcelo Odebrecht mostra que se trata de algo mais complexo e interessante.

Marcelo caracteriza as “propinas” como recursos pagos diretamente a indivíduos e sem uma relação com uma agenda de interesses da empresa. Neste sentido, “propina” é entendida como a apropriação privada do recurso, legal ou ilegal, doado pela empresa. Embora admita abertamente que o grupo havia pagado propinas a políticos e partidos, Marcelo insiste que este seria um aporte, “natural”, de recursos para partidos políticos e campanhas eleitorais, sem vínculo com uma “contrapartida específica”, como ocorreria com a “propina”, mesmo reconhecendo que era uma “ilicitude eleitoral”, dado que impactava as disputas eleitorais. Segundo Marcelo, embora fosse “errado”, haveria uma distinção entre financiamento ilegal de campanha e pagamento de “propina”, ou seja, entre pagar para ter “apoio político” e “pagar a pessoa diretamente”.

Outra preocupação de Marcelo Odebrecht é que a propina, que seria mais fácil de rastrear, poderia prejudicar e comprometer outros “pagamentos não contabilizados” que estariam ligados à agenda de interesses da empresa, e, assim, “contaminar” esta agenda. Além disso, a propina teria também um impacto na gestão dos pagamentos, e esse seria um dos motivos de Marcelo coordenar pessoalmente os financiamentos relativos às campanhas presidenciais. Assim, a relação ilegal com o governo é naturalizada, e caberia ao empresário apenas tentar estabelecer um procedimento, no caso, um “crédito”, disponibilizado ao representante do partido.

Associado a esta distinção entre propina e *Caixa 2*, havia outra entre “contrapartida específica” e “agenda ampla” de interesses da empresa. A ideia de “contrapartida específica” não era associada apenas com propina, mas também com uma “agenda específica”. Segundo Marcelo, alguns pagamentos teriam sido um acerto legal, ou seja, a partir de um conjunto de contrapartidas acertadas entre empresa e Governo, mas que teriam sido “contaminados” por outros financiamentos ilegais. Por fim, entende que esta teria sido uma ação de sucesso, ao menos “razoável”, no caso envolvendo pagamentos tanto legais quanto ilegais.

Por sua vez, a ideia de “agenda ampla” está associada à tentativa de apresentar o financiamento ilícito de campanha como uma prática legal de defesa de um conjunto “mais amplo” de interesses legítimos, mesmo que através de uma prática ilícita. Marcelo Odebrecht apresenta a “agenda ampla” como aquela que seria tratada com os Ministros da Fazenda, no caso durante os Governos Lula e Dilma, e que envolvia a defesa de interesses de outras empresas, como a Vale, o Itaú e a Unica, dado que buscavam se beneficiar da relação de Marcelo com o Governo e pediam que ele também levasse as suas demandas, o que teria lhe custado horas e horas de negociação com os Ministros.

Assim, as relações de Marcelo Odebrecht com o governo, as quais envolviam as ilegalidades já admitidas, em especial o *Caixa 2*, abririam espaço para encaminhamento de demandas de outras empresas. Em relação a isso, ele não entende como uma ilegalidade, mas sim como uma aproximação com o governo que funcionou também como canal de representação e articulação de interesses, supostamente legais, de outras empresas de outros setores. Enfim, Marcelo teria se tornado um representante importante do grande empresariado e teria assumido essa tarefa, mesmo que isso tivesse lhe dado muito trabalho. Sendo ou não estratégia da defesa, Marcelo procurava colocar sua relação com o governo como uma “relação ampla de todos os setores”, à qual não associava nenhuma ilegalidade, ao contrário, via como algo meritório, devido à amplitude da agenda e à sua dedicação pessoal. E, caso teria ocorrido alguma “ilicitude eleitoral”, teria sido mais no que diz respeito à fonte do recurso utilizado do que no seu uso.

Em suma, observa-se o empenho de Marcelo Odebrecht em colocar tanto certas “contrapartidas específicas” quanto a “agenda ampla” como processos de defesa de interesses legítimos, não apenas da empresa, mas também do setor da construção civil, e que o erário público estaria sendo respeitado. Tal conduta é muito semelhante a que marca a ação legal e explícita dos empresários na busca de seus interesses, ou seja, a alegação de que se trata de algo de interesse difuso e legítimo, mesmo quando

existe uma assumida dimensão particular e muitas vezes exclusiva. Além disso, o empenho em distinguir *Caixa 2* de propina, sem negar que esta tenha sido praticada pela Odebrecht, em primeiro lugar, reforça a ideia de que a empresa buscava reagir e promover ajustes na *cultura gerencial* das práticas ilegais em função da ocorrência de novos fatos.

Por fim, outros aspectos da *cultura gerencial da empresa* podem ser brevemente comentados. Emílio Odebrecht ressalta que orientou Marcelo e Pedro Novis a observarem “três vetores” na doação a partidos políticos: “evitar discrepância (de valores) entre partidos, (...) negociar ao máximo” e pagar “no tempo mais esticado possível” (D14). Marcelo Odebrecht informa que o grupo pagava também para campanhas no exterior e afirma que os demais empresários do grupo talvez não se preocupassem com os seus alertas sobre a possibilidade de “contaminação” porque as campanhas não eram no Brasil.

Como vimos acima, as particularidades da *cultura gerencial da empresa* remetem ao modo como a Odebrecht administrava internamente sua relação com o financiamento ilegal. Isso impactava os *aspectos institucionais* e as *particularidades organizacionais internas* à empresa relativas a este assunto. Nesse sentido, um dos principais aspectos da *representação* acerca do *formato institucional* gira em torno da referência ao “Setor de Operações Estruturadas”, que seria o órgão da empresa responsável pelo controle e execução dos pagamentos ilegais, em especial do financiamento político, o qual chamou muita atenção dos operadores da Justiça e da mídia nacional e internacional.

Em um primeiro momento, Marcelo Odebrecht nega a existência de tal “Setor”. Em outro, afirma que isso nunca deveria ter sido criado, como teria ocorrido em 1993 à revelia sua e de outros executivos da empresa. Marcelo declara que só teria tomado conhecimento depois de preso e da assinatura do acordo de leniência da empresa. Mas, reconheceu que isso era um procedimento difuso entre os empresários da Odebrecht para lidar com as informações relativas a “pagamentos não contabilizados”.

Posteriormente, reconheceu que desde 1980 havia uma “equipe”, mas não um “setor”, responsável por estes pagamentos e pelo apoio aos empresários do grupo, e que tais pagamentos tinham relação com financiamento de campanha.

Assim, verificamos um exemplo importante dos procedimentos adotados na defesa dos interesses da empresa que, de um lado, decorriam de sua *cultura gerencial da empresa* e, de outro, era indica o esforço de racionalização, profissionalização e aperfeiçoamento institucional, tanto para as práticas legais quanto para as ilegais de financiamento, as quais se davam de forma articulada. E havia mais preocupação com o gerenciamento administrativo e financeiro dos pagamentos ilegais do que com a possibilidade de isso vir à público.

A *representação* acerca do *formato institucional* indica que havia uma combinação entre:

- 1- busca da eficácia, dos ganhos gerenciais e da racionalidade da gestão empresarial, para a qual esses empresários haviam estudado e acumulado experiência profissional;
- 2- o aperfeiçoamento das formas de enfrentamento dos desafios do jogo político;
- 3- o reconhecimento das condições impostas pela natureza reconhecidamente criminosa das práticas relacionadas ao financiamento político ilegal. Isso sugere que o poder econômico e a sofisticação gerencial das grandes empresas podem favorecer a racionalização e a otimização não apenas da gestão das atividades empresariais normais e legais como também das ilegais, que também eram normais. Por último, todo esse empenho da empresa relatado na *representação* sobre o *formato institucional* mostra que o gerenciamento dos pagamentos ilegais também reagia e aprendia com os acontecimentos do mundo político, como indica a referência ao “Escândalo do Orçamento”.

Em relação à *cultura política* da Odebrecht a respeito de suas práticas ilegais, um primeiro aspecto da forma como esses empresários *representavam* a política é a caracterização feita do próprio financiamento político empresarial *ilegal*. Por um lado, Marcelo Odebrecht alega que “todo edital tem dono”, o que se definiria pela capacidade de dada empresa trabalhar com a autoridade pública o edital segundo seus interesses, prática que existiria há 30 ou 40 anos. Assim funcionaria a relação das empreiteiras com as autoridades governativas. A “confiança” entre empresário e político, acima abordada, comporia um “tripé”, junto com a capacidade da empresa de entregar a obra que o político queria e o apoio financeiro ao projeto do político. Segundo Marcelo Odebrecht, haveria um “tripé”: “... você tem que performar como empresa, você tem que apresentar coisas que sejam importantes, ou seja, é o lado bom, você tem que criar o segundo tripé, que eu digo, é a relação de confiança que você estabelece com a pessoa, e o terceiro tripé é o apoio financeiro que você dá ao projeto político dessa pessoa. Eu não acho que uma relação só movida a dinheiro vai funcionar e como também, infelizmente, uma relação só onde você levava bons projetos, bons investimentos, e que era uma relação de confiança, não funcionava porque também a pessoa tinha expectativa de você apoiar o projeto político dela ou a pretexto do projeto político dela”.

E isso, segundo Marcelo, aconteceria nos diversos setores das atividades econômicas, o que o leva à conclusão de que, tanto uma “relação só movida a dinheiro”, quanto uma relação baseada em “bons projetos, bons investimentos”, não funcionariam, porque o político tinha a “expectativa” de receber dinheiro para seu projeto político, ou o utilizava como pretexto para pedir apoio financeiro. Nas palavras de Pedro Novis, essas seriam “... exigências (...) extracontábeis”.

Esse é um aspecto importante da *representação* da Odebrecht acerca do sistema político. De um lado, a forma como o CEO e outros altos da *holding* Odebrecht descreviam o financiamento político empresarial. E de outro, como se colocavam ou se viam como agentes passivos diante das investidas e exigências dos políticos e partidos, mesmo admitindo que

isso também interessava às empresas. Isso não pode ser reduzido à tentativa de justificar as práticas ilegais, até porque essas estavam sendo, ao menos em parte, assumidas frente à Justiça.

Esta *representação* reforça a ideia de que se tratava de uma forma como esses empresários descreviam não só eles próprios, mas todos os empresários do país, no processo político. Isso pode ser complementado pelo fato de que Marcelo Odebrecht declara que se “... sentia usado pelo governo” e que o resultado deste tipo de relação política seria depreciativo em relação à sua pessoa e à sua posição empresarial, pois, como ele próprio diz, esta atuação estava relacionada a problemas que o próprio governo criava. Enfim, mesmo aceitando a ideia de “embaixador” dos interesses empresariais, expressão usada pelo juiz da Justiça Eleitoral, afirmava que se sentia mesmo “usado”.

Entendemos que esta *representação* significa mais do que simplesmente a tentativa de se colocar como vítima do governo e dos políticos. Trata-se de algo que remete à forma como esses empresários pensavam e agiam em relação à política, os políticos e as instituições políticas. Por mais que isso seja parte da estratégia de defesa, é também uma justificativa para a passividade e a acomodação diante das formas institucionais, legais e ilegais, do sistema político, no caso, daquilo que diz respeito às particularidades do financiamento político empresarial *ilegal*.

E não é só a condição de réus que os colocava diante da necessidade de lamentar a forma como as coisas funcionavam, mas também o reconhecimento de que a aceitação desta forma de defesa de seus interesses políticos teve um custo. Reduzir este comportamento e este ponto de vista a “pragmatismo” não permite compreender as nuances de como isso é construído enquanto *representação* e como esta permite pensar as ações concretas, as *culturas* e os *formatos institucionais*.

Enfim, o que essa *representação* mostra é a tendência dos empresários a deixarem de lado o processo de construção e de mudança das formas

de fazer política e do processo decisório e de não possuírem um projeto claro de sistema político que ultrapasse a relação direta entre dinheiro e política, embora seja mais fácil se colocar como vítima, como ator passivo ou até “otário” quando as coisas erradas que estavam sendo feitas, e que eram muito vantajosas, vem à tona.

A ideia de pragmatismo pode obscurecer que, na verdade, os empresários agiram como normalmente agem diante da complexidade do jogo político: de forma passiva, ainda mais quando se trata de uma situação que lhe era vantajosa. Portanto, essa era sim uma escolha e aponta para os limites da própria constituição dos empresários enquanto atores políticos. Quando se trata da definição das formas do processo político, diante do profissionalismo dos políticos neste campo, em especial daqueles que estão no governo, a falta de preparo dos empresários para esta dimensão do jogo político se manifesta, mesmo que não interpretemos literalmente a auto definição de Marcelo Odebrecht como um “otário” ou “bobo da corte”.

Em suma, a *representação* sobre as práticas relatadas pelos empresários se refere a o que se denomina *grand corruption*, dado que teriam envolvido personagens e instituições políticas de grande relevância, grande desfalque do erário público em benefício de um grupo específico e reduzido. A análise dessa *representação* acerca do financiamento político ilegal indica certa homogeneidade ou certo partilhamento, como, por exemplo, quando procuravam caracterizar a própria prática política e sua relação com o sistema político como algo que era dado e que não poderia ser feito de forma diferente.

Enfim, tanto no âmbito legal quanto no ilegal das ações empresariais, haveria uma tendência a recorrer à justificativa da *impotência* para não atuar na mudança da forma de funcionamento da política e para o seu desinteresse em fazê-lo. Entretanto, devemos considerar também que, tanto na legalidade, quanto na ilegalidade, eles podem ter seus interesses atendidos, mesmo que expressando insatisfações. Portanto, não teriam

motivos para promover alterações nas formas de funcionamento do jogo político. Outra hipótese é que, se algum dia tentarem promover tais alterações, terão que enfrentar antes de tudo sua própria forma de pensar a política e a si próprios como atores políticos.

Apesar da condição econômica e mesmo política diferenciada, a *representação* dos empresários da Odebrecht sobre o financiamento político possui um lado que não se distingue muito daquela que se pode encontrar no âmbito do *senso comum*, ou seja, a ideia de que políticos só pensam em recursos, legais ou ilegais, os partidos são meras máquinas que sobrepõem seus interesses de arrecadação e votos a o que seriam os interesses sociais e que essa dinâmica seria marcada pela corrupção e pelo tráfico de influência.

Isso não significa que esta leitura é equivocada, mas sim que é apenas parcial e simplificadora, como pode-se observar ao considerar o outro lado dessa própria *representação*. Neste outro lado, enquanto portadores de grande poder econômico, o financiamento político ilegal é vivenciado de forma mais realista e menos normativa, exatamente em função desta combinação entre a condição de grandes empresários e o exercício da política na defesa dos interesses da empresa em um contexto de ilegalidade, ao qual se sobrepunha e se articulavam as formas legais. Deste ponto de vista, esta condição coloca os empresários em experiências e práticas que são bem diferentes daquelas dos cidadãos em geral, que seriam os portadores do que chamamos de *senso comum*.

A *representação* de que as práticas ilegais seriam “naturais” e que existiam há 30 ou 40 anos poderia servir como forma de justificá-las, ainda mais quando se está diante da Justiça. Mas, o que nos parece mais revelador é que tais práticas funcionavam muito bem para a empresa, dado que esta nunca procurou alterar tal quadro de relações com os governantes e só passou a tratar disso como “ilicitude” e como “erro” quando estavam sendo julgados por tais práticas.

Tal *representação* mostra que entre as principais características desta perspectiva estaria o fato de que o CEO de um grande grupo como a Odebrecht, independentemente de sua condição familiar, ocupava uma posição que exigia, entre outras, a competência para efetivar e aprimorar a *cultura* de gerenciamento e os procedimentos administrativos e institucionais das práticas ilegais, além de saber lidar com os políticos e administrar os conflitos entre eles, e por vezes ser portador de outros interesses.

A ocorrência de investigações como a OLJ e tantas outras que se deram e ainda estão em andamento no Brasil de nossos dias não permite acreditar que haja constrangimentos suficientes para acabar com tais práticas, pois os relatos dos empresários da Odebrecht indicam que a tendência é a persistência da tentação de seguir o caminho da ilegalidade, desde que este esteja entre os mais fáceis. Portanto, o caso da Odebrecht sugere que somente a combinação entre leis e instrumentos de investigação mais eficazes e uma mudança na *cultura gerencial* e sobretudo na *cultura política* dos empresários quando vão defender seus interesses, poderia dar algum resultado no combate à corrupção política no longo prazo. Isso mostra como há algo de geracional nisso tudo, ou seja, a ruptura com o que vinha sendo feito só ocorre se houver um motivo muito relevante, dramático e externo.



Perú: una democracia capturada

Marina Mendoza*

Entre las impugnaciones al modelo neoliberal y las evidencias de una crisis orgánica

En las últimas dos décadas, la relación entre las élites económicas y políticas de los países latinoamericanos ha sido foco de numerosos estudios, especialmente ante la evidencia de su estrechamiento post crisis financiera internacional de 2008. Estos trabajos, preocupados tanto por las consecuencias de este proceso sobre la profundización de las desigualdades sociales, la corrupción o la captura de las decisiones estatales por intereses corporativos, han señalado la importancia de explorar el papel de las élites en la afectación de la calidad democrática.

El caso peruano es sintomático del proceso de colusión de intereses público-privados que, desde la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), ha venido profundizándose en detrimento del interés general. El proceso de neoliberalización por vía autoritaria que se consolidó durante su mandato generó las condiciones de posibilidad de un régimen frágil, excluyente y susceptible a la captura de intereses privados.

El orden neoliberal se sostuvo mediante la restricción de las vías de participación de las grandes masas populares -particularmente indígenas y campesinas- y la acumulación de poder económico y político de las

* Socióloga, Dra. en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), Becaria Posdoctoral de CONICET. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Élite económicas, Estado y desigualdad.

clases dominantes. El retorno a la democracia¹ a inicios de los 2000, a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, no operó una ruptura radical con el consenso neoliberal, sino, contrariamente, una continuidad de sus lógicas de exclusión.

Hasta las revueltas populares del año 2020, en el marco de la emergencia sociosanitaria por la expansión del virus SARS-CoV-2, este modelo no había sido cabalmente impugnado. En aquella coyuntura, miles de ciudadanos se volcaron a las calles de Lima para denunciar la ilegitimidad del proceso de destitución de Martín Vizcarra² por “incapacidad moral permanente” y su reemplazo por un nuevo gabinete presidido por Manuel Merino que la ciudadanía percibió como ilegítimo, provocando su renuncia.

Pero, sobre todo, las demandas populares solicitaron la revocación de la Constitución fujimorista (1993) a la que responsabilizaban por las condiciones sociales, económicas y políticas en las que el país pudo afrontar la crisis sociosanitaria. En gran medida, la informalidad laboral que por entonces superaba el 70% de la población económicamente activa; la presencia estatal selectiva que prioriza la capital en detrimento de las regiones serranas y amazónicas; y un sistema de salud privatizado y excluyente, fueron algunos de sus focos de ataque al andamiaje neoliberal.

Un episodio más radical de esta crisis se produjo en diciembre de 2022 cuando el expresidente Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso -mayoritariamente fujimorista- y la reestructuración del Poder Judicial,

- 1 Recordemos que el gobierno de Alberto Fujimori, a pesar de haber asumido su cargo por voluntad popular en ambos períodos (1990 y 1995), es considerado por la historiografía como una “democradura” o “dictablanda”, lo que responde a dos procesos. El primero, el autogolpe de 1992 que disolvió el Congreso e instauró un gobierno de emergencia que, so pretexto de la lucha antiterrorista, cometió violaciones a los derechos humanos. El segundo proceso se vincula con las denuncias de fraude tanto ante el triunfo de 1995 como en el del año 2000.
- 2 Martín Vizcarra fue, hasta 2018, vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski (PPK, 2016-2018), quien antes de ser relevado de su cargo por acusaciones de corrupción relacionadas con la constructora Odebrecht, decidió renunciar a la presidencia.

la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Al igual que con Vizcarra, el Parlamento definió su destitución por “incapacidad moral permanente” y colocó en su lugar a la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.

La decisión activó la movilización ciudadana encabezada por las poblaciones indígenas y campesinas que habían sido interpeladas por la figura y el discurso de Castillo. Esas poblaciones, largamente excluidas del proyecto de nación, avizoraban en el maestro serrano que se había convertido en presidente, una oportunidad de, finalmente, ser incluidas. Si bien las demandas de los manifestantes se centraron inicialmente en el pedido de liberación de Castillo, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones, rápidamente retomaron el pedido de reforma constitucional que había surgido en las movilizaciones de 2020. En esta coyuntura, la demanda de un proceso refundacional que definiera nuevas bases de consenso simbolizaba un pedido de reconocimiento por parte de las élites limeñas de la existencia de esas inmensas mayorías históricamente desplazadas por el centralismo.

La ausencia de elementos de legitimación del régimen se sustituyó con violencia desplegada sobre aquellos colectivos, criminalizados y contruidos como amenazas desde los procesos de centralización estatal. Las más de 1300 manifestaciones pacíficas ocurridas en todo el territorio nacional entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 fueron duramente reprimidas, provocando la muerte de 49 personas y más de mil heridos (Human Rights Watch, 2023). El uso desproporcionado de la fuerza letal de la Policía Nacional de Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas fue responsable de los asesinatos, calificados de “ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias” (Human Right Watch, 2023) y la ocurrencia, en casos concretos, de masacres (CIDH, 2023).

A la violencia física se sumó la estigmatización y el maltrato a los manifestantes, mediante la asignación de la categoría campesino-indígena-terrorista que retrotrae al conflicto armado interno (CAI, 1980-2000),

estrategia frecuentemente utilizada por las élites políticas gobernantes desde el posconflicto con fines disciplinatorios (terruqueo). Algunos de los detenidos fueron acusados de pertenecer a organizaciones terroristas y el Ejecutivo acompañó este diagnóstico al calificar de violentos a los movilizados, solicitando, al mismo tiempo, el reconocimiento de los miembros de la PNP como “héroes de la patria” por su labor durante las protestas.

Como evidencia esta breve reconstrucción, el quiebre se produjo cuando las clases subalternas, particularmente la fracción más perjudicada por el modelo neoliberal decidió con sus movilizaciones masivas dejar de colaborar en el sostenimiento del andamiaje neoliberal. Emergió, en esta coyuntura, una propuesta hegemónica alternativa que, aún sin fuerza suficiente para desarticular la estructura hegemónica, logró visibilizar sus contradicciones.

Esto abrió un nuevo período de crisis que, dada la acumulación de escenarios de convulsión ocurridos en el último septenio, puede caracterizarse como orgánica en términos gramscianos (1981) o de la hegemonía neoliberal (Mendoza, 2023), a partir de la cual comienzan a visibilizarse las limitaciones de aquel orden, junto con la emergencia de propuestas de órdenes alternativos (Ansaldi y Giordano, 2012), provenientes de las comunidades históricamente marginadas del proyecto de nación (Monroe, 2023).

Estrategias de autopreservación de las élites económicas y políticas

En este escenario de crisis del andamiaje neoliberal, las élites económicas y políticas que contribuyeron a consolidarlo y que se beneficiaron de las medidas de reforma estructural, la *commoditización* de la economía y la acumulación de poder político de los principales grupos económicos, desplegaron estrategias de autopreservación. Así, cuando el esquema

neoliberal entró en crisis, las estrategias de preservación de las élites económicas, así como de las políticas, capturadas por los intereses de las primeras, se orientaron a recuperar la situación previa a la crisis.

El análisis de las estrategias de autopreservación de las élites -entendidas como modalidades de resolución de la crisis- evidencia la superposición de capas acumuladas de violencias de las clases dominantes limeñas sobre las comunidades de la sierra y la selva, con un aparato discursivo y represivo que instrumentaliza esta violencia ante episodios que amenazan su continuidad.

Una de estas estrategias es la destitución de presidentes por parte del Congreso, práctica que se ha normalizado en la institucionalidad peruana desde el año 2017 para resolver situaciones de inestabilidad o reorientar las políticas públicas hacia el reforzamiento de la hegemonía neoliberal. En efecto, desde el pedido de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2017, que se repitió en 2018 cuando se efectivizó la renuncia presidencial, siete han sido los procesos abiertos para reemplazar a las cabezas de los Ejecutivos: dos contra PPK, tres contra Martín Vizcarra (2019 y 2020) y dos contra Pedro Castillo (2021 y 2022), siendo promovidas o respaldadas por el sector fujimorista (Quispe, 10/09/2022).

El uso discrecional de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente obstruye “la separación y el equilibrio de poderes” y, al mismo tiempo, dada la falta de criterios claros respecto de su aplicación, obstaculiza la gobernabilidad (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2023: 19).

Si bien es el Congreso el que define la destitución, le precede la generación a nivel societal de las condiciones de aceptabilidad de la vacancia. Para lograr este objetivo, las élites políticas despliegan tácticas de deslegitimación del Ejecutivo que involucran denuncias de corrupción, lavado de dinero o incumplimiento de la función pública que son respaldadas

por el Poder Judicial, los medios de comunicación y *think tanks* afines, generando un clima desestabilizador.

Sin embargo, antes que un producto de la crisis actual, la incidencia de estas operaciones responde a la histórica debilidad de la institucionalidad política peruana. En efecto, la debilidad institucional emergente de los procesos de centralización estatal y del extendido poder de la dominación oligárquica hasta bien entrado el siglo XX, explican las dificultades de consolidar un proyecto unificado y constituyen -en palabras de Durand (2019)- un terreno fértil para la captura de las decisiones políticas por parte de las élites económicas.

A esto se suman las reformas estructurales del Estado implementadas durante el decenio fujimorista que sentaron las bases de una relación más estrecha entre las élites políticas y económicas. La creciente concentración de poder que las principales corporaciones -volcadas al sector extractivista- experimentaron durante el superciclo de *commodities* (2003-2013), profundizó los escenarios de colusión público-privada. Tras la crisis capitalista de 2008 que ahondó la concentración de poder de las élites económicas, las situaciones de captura de las decisiones políticas se afincaron en el funcionamiento de la institucionalidad peruana.

La captura de las decisiones estatales opera en sistemas políticos porosos como el peruano en los que confluye la concentración del poder decisorio en el Ejecutivo con la acumulación de poder de los grupos económicos (Durand, 2019). El tipo de Estado que emerge de estos procesos se muestra poco presente en su faz social, pero resulta muy activo en materia coercitiva, desplegando sus capacidades represivas para anular las protestas.

Las reformas de los noventa debilitaron aún más a los partidos como sistemas de representación de las voluntades populares. Tras el decenio fujimorista se consolidó una tendencia hacia la conformación de candidaturas volátiles y frentes electorales que se disipan luego de los procesos

electorales. La ausencia de vías de canalización de las demandas populares alimenta esta institucionalidad neoliberal excluyente que, ante su incapacidad para responderlas, despliega una respuesta coercitiva. El aumento de las protestas callejeras constituye la contracara de este proceso, generando “un contrapeso efectivo del Gobierno” (Ilizarbe, 2022: 20).

Otra estrategia de autopreservación es la ya mencionada instrumentalización del terruqueo, práctica surgida en el contexto del CAI y utilizada desde entonces para desprestigiar a un adversario, sea un candidato político, una movilización o un colectivo visualizado como una amenaza al orden establecido. Estos sujetos son presentados como terroristas enemigos de la democracia mediante construcciones discursivas y simbólicas que operan en el imaginario social anulando cualquier petición política.

El terruqueo se demuestra útil para la preservación de los intereses de las élites económicas y políticas neoliberales al apelar constantemente al temor del retorno terrorista, lo que no sólo deslegitima la protesta social, sino que, además, desarticula la organización. Estas comunidades indígenas y campesinas que son construidas como amenazas han sido las más afectadas por el conflicto armado interno, dado que constituyeron el 75% de las víctimas (CVR, 2008), lo que se explica, asimismo, por la discriminación y el racismo imperante en las fuerzas policiales y militares.

La tercera estrategia que identificamos también hunde sus raíces en la institucionalización del modelo neoliberal: la utilización del estado de emergencia como dispositivo de control frente a manifestaciones de descontento social. Esta práctica se ha normalizado al calor del avance de la frontera extractiva sobre territorios indígenas o zonas donde las poblaciones locales resisten a la instalación de megaproyectos.

La normalización de la emergencia, símbolo de la cultura autoritaria que gestó el fujimorismo, opera también de manera preventiva, militarizando ciudades y regiones en pos de garantizar la seguridad jurídica para los inversores.

La institucionalización del neoliberalismo cimentó las bases de un orden político estable para los negocios, securitizando el modelo de desarrollo y militarizando el orden interno. Bajo el argumento de la seguridad jurídica, se consolidó un andamiaje político que habilitó regímenes de contratación excepcionales para los inversores vinculados a las industrias extractivas, al mismo tiempo que garantizó el manejo de la conflictividad ligada al modelo.

Elementos de una democracia capturada

Las condiciones que identificamos son evidencias de una democracia capturada por intereses corporativos. Las estrategias de sostenimiento del andamiaje neoliberal, en su fase neoextractivista-especulativa, refuerzan un tipo de relacionamiento entre las élites políticas y económicas que consolida un sistema desigual, discriminador y excluyente.

El propio ejercicio de la democracia representativa encuentra límites ante las crecientes atribuciones del poder legislativo, judicial y mediático que anulan las elecciones populares mediante prácticas de *terruqueo*, destitución y armado de causas. La estigmatización y criminalización de la protesta es acompañada de un abordaje estatal coercitivo de la conflictividad social que hunde sus raíces en el racismo decimonónico y sus herencias coloniales.

Esto, sumado a la histórica debilidad de las instituciones estatales y los crecientes procesos de colusión público-privado que derivan en actos de corrupción, erosionan la confianza ciudadana en el funcionamiento de este orden democrático, pugnando en consecuencia por la construcción de órdenes alternativos.

Las estrategias de autopreservación de las élites que identificamos constituyen modalidades autoritarias de resolución de las crisis de impugnación al modelo neoliberal. El escenario de crisis orgánica que se abrió en diciembre de 2022 aún sigue su curso, a pesar de la aparente estabilidad

que ha logrado el gobierno de Dina Boluarte, incluso ante los reiterados pedidos de adelanto de las elecciones por parte de la comunidad nacional e internacional. Un fallo de la Corte Suprema del año 2023 que calificó de delito el bloqueo de una carretera en el marco de una manifestación contra una empresa minera, desconociendo el derecho a la protesta, es expresión del cariz autoritario que la respuesta estatal ha adoptado en pos de garantizar el sostenimiento del andamiaje neoliberal.

Las manifestaciones ciudadanas encabezadas por poblaciones históricamente marginadas del proyecto de nación, si bien evidencian la relevancia política de estos actores, se enfrentan con los estratos de autoritarismo, debilidad institucional y concentración del poder de las élites que generan situaciones de captura estatal, configurando así, para el caso peruano, una democracia capturada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica. (2012). *América Latina, la construcción del orden*. Ariel.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Organización de Estados Americanos (/2023). *Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales*. <https://bit.ly/3ByZ4ON>
- CVR-Comisión de la Verdad y Reconciliación (2008). *Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación - Perú*. CVR.
- Durand, Francisco (2019). *La captura corporativa del Estado en América Latina*. Fondo Editorial PUC/OXFAM.
- Human Rights Watch (2023). *Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú*. HRW. <https://bit.ly/3ZQlxkn>
- Ilizarbe, Carmen (2022). *La democracia y la calle. Protestas y contrahegemonía en el Perú*. IEP.
- Mendoza, Marina (2023). Perú, entre la crisis orgánica y las élites políticas capturadas. Un ensayo sociohistórico. *Disjuntiva*, 4(2).

Monroe, Javier (2023). Curso *Poder y racismo en el Perú*. Asociación Periferia, Grupo de Estudios sobre Poder y Conflicto. Marzo-abril 2023.

Quispe, Estéfany Luján (10/09/2022). Una amenaza constante desde el 2016: ya van siete pedidos de vacancia presidencial en seis años. *Infobae*. <https://bit.ly/3ZRh9lb>





Capitalismo y dictadura

Élites en Nicaragua

Francisco Robles Rivera*

Alheli Vanessa Bermudez Laynes**

Este artículo analiza la evolución histórica y el papel de las élites económicas en Nicaragua, examinando cómo han influido en el desarrollo del capitalismo en el país, consolidado sus redes familiares y relaciones de poder, y construido su interacción con el Estado. Desde el auge de la agricultura en el siglo XIX hasta la era contemporánea bajo el gobierno de Daniel Ortega, las élites nicaragüenses han adaptado sus estrategias y vínculos en respuesta a los cambios sociales, económicos y políticos para mantener su influencia y preservar sus intereses en un contexto en constante transformación.

De las primeras élites agrícolas a la expansión del capitalismo industrial durante la dictadura de Somoza

El surgimiento de las élites económicas en Nicaragua tiene sus raíces en la expansión de la agricultura de exportación, especialmente el cultivo del café. Durante el siglo XIX y principios del XX, el acceso y control de la tierra fue un factor fundamental que permitió a las familias terratenientes acumular riqueza y consolidar poder económico. Estas familias

* Universidad de Costa Rica. Co-coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO Élites económicas, Estado y desigualdad.

** Universidad de Costa Rica.

establecieron redes de influencia a través de alianzas matrimoniales y relaciones de reciprocidad, que reforzaron su estatus y las convirtieron en actores clave en la estructura de poder del país.

Sin embargo, estas élites enfrentaron limitaciones, ya que su economía dependía del financiamiento y los mercados externos, especialmente de Estados Unidos. Este hecho, sumado a una infraestructura deficiente y una producción limitada, restringió la independencia de las élites nicaragüenses en comparación con sus pares en otras partes de Centroamérica.

La dictadura de Anastasio Somoza y su familia (1936-1979) marcó un período de expansión económica para las élites cercanas al régimen, con el auge de industrias como el algodón y la caña de azúcar. Durante este tiempo, las familias de élite beneficiadas por Somoza consolidaron su poder mediante concesiones de tierras y la manipulación de políticas para proteger sus intereses. Las industrias del algodón y el azúcar crecieron gracias al acceso preferencial a crédito, subsidios y apoyo estatal, beneficiando a las élites aliadas al gobierno.

A pesar de estos beneficios, las élites comenzaron a resentir el poder cada vez más monopolístico de Somoza, especialmente después del terremoto de 1972. Este evento permitió al régimen intervenir en la economía de manera más directa, lo que generó conflictos con el sector privado. Como respuesta, las élites fundaron el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que se convirtió en una herramienta de organización empresarial contra las políticas de Somoza, defendiendo los intereses empresariales.

La Revolución Sandinista y la relación conflictiva con las élites

Con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, el gobierno implementó políticas de nacionalización y reforma agraria que afectaron considerablemente a las élites. El Frente Sandinista de Liberación Nacional

(FSLN) adoptó una postura socialista y tomó control de sectores clave de la economía. Estas medidas generaron tensiones con las familias de élite, muchas de las cuales optaron por el exilio para protegerse.

Algunas, sin embargo, buscaron adaptarse al nuevo régimen y establecieron relaciones de cooperación con el FSLN. A través de estas alianzas, ciertas familias lograron mantener su influencia dentro de la economía controlada por el Estado. Este periodo muestra cómo las élites nicaragüenses adaptaron sus estrategias de supervivencia, aprovechando oportunidades de colaboración con el gobierno revolucionario, sin dejar de lado sus intereses económicos.

La era neoliberal: privatización y apertura económica

Con el cambio de gobierno en 1990, Nicaragua inició un período de reformas neoliberales bajo la presidencia de Violeta Chamorro. Este periodo trajo consigo una fuerte privatización de las empresas estatales y la desregulación de la economía, permitiendo a las élites recuperar sus posiciones y consolidarse en sectores estratégicos como el financiero, agrícola y exportador. La privatización de más de 300 empresas estatales fortaleció a grupos económicos que lograron aprovechar las exenciones fiscales y políticas de incentivos para expandirse, tanto a nivel nacional como regional.

El modelo económico de este periodo incentivó la creación de zonas francas y maquilas, lo cual atrajo inversión extranjera y generó empleos, aunque en condiciones de bajos salarios y mínima regulación laboral. Las élites nicaragüenses se beneficiaron de esta expansión a través de alianzas con capital extranjero, consolidando conglomerados empresariales que ampliaron su presencia en Centroamérica y en sectores como la banca y la agroindustria. Los grupos Pellas, Lafise y Promerica, entre

otros, se fortalecieron mediante la diversificación de sus inversiones y la expansión en mercados regionales.

A pesar de estos beneficios económicos, el neoliberalismo también incrementó la dependencia de Nicaragua de los capitales extranjeros, y las estructuras de poder se volvieron cada vez más jerárquicas y concentradas. Las élites económicas consolidaron sus redes y aumentaron su influencia en las decisiones políticas, pero enfrentaron el reto de mantener la estabilidad en un contexto de creciente desigualdad y limitadas oportunidades de movilidad social.

La alianza entre las élites y el gobierno de Ortega

La vuelta al poder de Daniel Ortega en 2006 marcó un cambio significativo en la relación entre las élites y el gobierno. Ortega, tras ganar las elecciones, estableció un pacto con el sector empresarial a través del COSEP, en un modelo de cooperación que recordaba las relaciones de poder de la época de Somoza. Esta alianza, conocida como el “modelo COSEP,” facilitó la colaboración entre el gobierno y las empresas, garantizando a las élites un entorno estable para sus negocios y un acceso preferencial a la formulación de políticas.

La relación entre Ortega y el COSEP permitió a las élites influir en la agenda legislativa, ya que los líderes empresariales participaron activamente en la creación de leyes y regulaciones. Entre 2008 y 2015, el COSEP contribuyó a la redacción de 105 leyes y 42 reglamentos, consolidando su rol como actor clave en el diseño de políticas públicas. Además, el gobierno y el COSEP establecieron comisiones de supervisión y comités conjuntos en ministerios y agencias estatales, fortaleciendo la colaboración público-privada.

Un factor que consolidó esta relación fue el apoyo financiero de Venezuela, que entre 2007 y 2016 inyectó alrededor de 4.400 millones de dólares a la economía nicaragüense. Estos fondos, canalizados a través de

proyectos de infraestructura, energía y programas sociales, permitieron al gobierno ofrecer estabilidad económica y mantener a las élites satisfechas. Ortega delegó al COSEP la interlocución con actores internacionales, lo que fortaleció el modelo corporativista, donde el gobierno garantizaba seguridad jurídica y un marco de beneficios para las élites a cambio de su apoyo.

Expansión de los negocios de la familia Ortega

En paralelo al fortalecimiento de las élites tradicionales, la familia Ortega desarrolló su propio conglomerado de empresas, asegurando su control sobre sectores estratégicos como los medios de comunicación, el petróleo y el sector inmobiliario. Los hijos de Ortega controlan varios canales de televisión y empresas de publicidad, que les permiten obtener beneficios económicos así como influir en la narrativa mediática. Las redes de poder de la familia Ortega se extendieron al sector energético mediante acuerdos con Venezuela, lo que consolidó su posición en la industria de combustibles.

Además de los medios y la energía, la familia Ortega ha desarrollado una red empresarial que incluye negocios en el ámbito de la seguridad, bienes raíces y distribución de productos. La falta de transparencia y el control sobre el aparato estatal les han permitido mantener una posición dominante, limitando la competencia y favoreciendo sus propios intereses. La estructura de negocios de la familia se sustenta en relaciones de clientelismo y un control autoritario sobre el Estado, consolidando un modelo de capitalismo donde la influencia política y económica están profundamente entrelazadas.

Reconfiguración de las élites en la Nicaragua contemporánea

Desde 2018, la relación entre las élites y el gobierno de Ortega ha sufrido tensiones debido a la persecución política y fiscal del régimen. En respuesta a las protestas y manifestaciones, el gobierno de Ortega ha tomado medidas contra el COSEP, encarcelando a sus líderes y cancelando la personería jurídica de la organización, junto con la de otras cámaras empresariales. Esta ruptura ha llevado a algunas élites a buscar alianzas con capital regional para proteger sus intereses y prevenir la expropiación de sus bienes.

La economía de Nicaragua se caracteriza actualmente por la concentración del poder en un pequeño grupo de élites, en su mayoría vinculadas directamente al gobierno. Esta estructura de poder ha debilitado el tejido gremial empresarial y ha llevado a una economía donde la cercanía con el Estado es clave para la supervivencia y el éxito económico. En un contexto de represión política y control autoritario, las élites nicaragüenses han adoptado una estrategia de adaptación y negociación directa con el gobierno, abandonando las pretensiones de independencia política y aceptando un modelo de capitalismo de redes y clientelismo.

REFERENCIAS

- Mayorga, Fernando José (2007). *Megacapitales de Nicaragua*. Ediciones Albertus. 46, 1-29. <https://doi.org/10.15517/aeca.v46i0.41830>
- Monte, Alfredo y Gómez, Juan Pablo (2020). *Autoritarismo, violencia y élites en Nicaragua. Reflexiones sobre la crisis (2018-2019)*. Anuario de Estudios Centroamericanos, Osorio Mercado, Héctor y Rodríguez-Ramírez, Raúl (2020). *Crítica y crisis en Nicaragua: La tensión entre democracia y capitalismo*. Anuario de Estudios Centroamericanos,

46, 409–451. <https://doi.org/10.15517/aeca.v46i0.45081>

Spalding, Rose J. (1994). *Capitalists and Revolution in Nicaragua: Opposition and Accommodation, 1979-1993*.

Spalding, Rose J. (2017). *Los empresarios y el estado posrevolucionario: El reordenamiento de las élites y la nueva estrategia de*

colaboración en Nicaragua. Anuario de Estudios Centroamericanos, 43, 149–188. <https://doi.org/10.15517/aeca.v43i0.31556>

Vilas, Carlos M. (1992). *Family affairs: Class, lineage and politics in contemporary Nicaragua*. Journal of Latin American Studies, 24(2), Article 2.



MISCELÁNEAS

Latinoamérica desde arriba
Número 1 • Noviembre 2024

Élites en la nube

El Zapato Aprieta (podcast)



El Zapato Aprieta. Un podcast que examina algunas raíces de las desigualdades. Es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales UCR.

Escuchá nuestro segundo episodio de la Séptima Temporada de El Zapato Aprieta, titulado: “Nuevas derechas, élites económicas y desigualdades”.

En este episodio de El Zapato Aprieta, nuestro investigador Francisco Robles Rivera se une con Franco Delle Donne para conversar sobre la relación, los cambios y los aprendizajes en torno a las nuevas derechas en América Latina, los EE.UU. y Europa.

Generación 94 (podcast)



En 1994 se reformó la Constitución Argentina. En este podcast sus protagonistas cuentan cómo fue aquel proceso en el que más de 300 convencionales constituyentes se mudaron a la provincia de Santa Fe por tres meses. Las discusiones, los acuerdos y las historias detrás de un hecho histórico.

Conducción: Rodis Recalt

Producción: Leandro Massaccesi y Valetín Ferreyra.

REAL - Red Élite América Latina

La Red Élite América Latina es un espacio de conexión, discusión y colaboración entre las personas que investigan a los actores más opacos de la sociedad, las élites. La investigación sobre las élites en América Latina está en álgido crecimiento, pero aún está algo fragmentada. Esta red busca cohesionar a las personas y grupos de investigación que se interesan por el análisis de élites económicas, políticas, mediáticas, militares, sociales y todos aquellos actores que por su posición o recursos influyen los designios de la sociedad.

Administradores: Julián Cárdenas y Francisco Robles-Rivera

Los ricos de Argentina



Portal web interactivo con datos sobre los entramados empresariales de las principales familias millonarias del país.

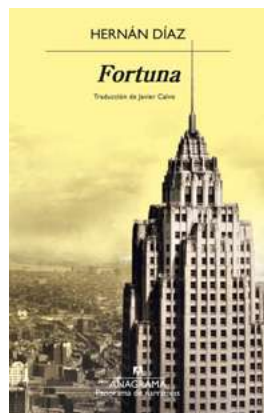
Producido y realizado por CEPA - Centro de Economía Política Argentina

Observatorio de Élités Parlamentarias en América Latina de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL)

Una de las investigaciones pioneras en el estudio de las élites parlamentarias en América Latina. Desde 1994 realiza encuestas de manera periódica a los parlamentarios de dieciocho países de la región con el fin de conocer cómo son y cómo se comportan los legisladores, qué tienen en común y qué les diferencia tanto ideológica como programáticamente. Para la obtención de información, PELA-USAL utiliza un cuestionario estándar adaptado a los distintos países que permite recopilar información sistemática y abundante y que ha dado lugar a una gran base de datos comparada y única en este campo.



Libros y literatura



Fortuna, Hernán Díaz. Anagrama, 2023

En los triunfales años veinte, Benjamin Rask y su esposa Helen dominan Nueva York: él, un magnate financiero que ha amasado una fortuna; ella, la hija de unos excéntricos aristócratas. Pero a medida que la década se acerca a su fin, y sus excesos revelan un lado oscuro, a los Rask empiezan a rodearlos las sospechas... Ese es el punto de partida de *Obligaciones*, una exitosa novela de 1937 que todo Nueva York parece haber leído y que cuenta una historia que puede, sin embargo, contarse de algunas otras formas. Hernán Díaz compone en *Fortuna* un magistral puzzle literario: una suma de voces, de versiones confrontadas que se complementan, se matizan y se contradicen, y, al hacerlo, ponen al lector ante las fronteras y los límites entre la realidad y la ficción, entre la verdad –acaso imposible de encontrar– y su versión manipulada. *Fortuna* explora los entresijos del capitalismo americano, el poder del dinero, las pasiones y las traiciones que mueven las relaciones personales y la ambición que todo lo malea. (De la contratapa).

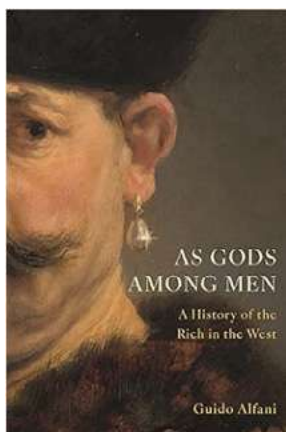
¿Querés saber más?

Te dejamos algunas notas de opinión sobre este libro:

<https://www.pagina12.com.ar/554572-fortuna-de-hernan-diaz>

<https://www.nytimes.com/2022/04/28/books/review/trust-hernan-diaz.html>

<https://letralia.com/lecturas/2023/09/09/fortuna-de-hernan-diaz/>



As Gods Among Men, Guido Alfani. Princeton University Press, 2023

Los ricos siempre han fascinado, a veces de manera problemática. Los pensadores medievales temían que los superricos actuaran “como dioses entre los hombres”; mucho más recientemente, Thomas Piketty hizo de la riqueza un tema central en los debates sobre la desigualdad. En este libro, Guido Alfani ofrece una historia de los ricos y superricos de Occidente, examinando quiénes eran, cómo acumularon su riqueza y qué papel desempeñaron en la sociedad. Abarcando los últimos mil años, con frecuentes incursiones en la antigüedad e integrando investigaciones recientes sobre la desigualdad económica, Alfani encuentra, a pesar de los diferentes caminos hacia la riqueza en diferentes épocas, continuidades fundamentales en el comportamiento de los ricos y las actitudes públicas hacia la riqueza a lo largo de la historia occidental. Su relato ofrece

una perspectiva novedosa sobre los debates actuales sobre la riqueza y la disparidad de ingresos. (Fuente: traducción de <https://www.goodreads.com/es/book/show/133240726-as-gods-among-men>)

¿Querés saber más?

Te dejamos algunas notas de opinión sobre este libro:

<https://clionauta.hypotheses.org/32814>

<https://blogs.lse.ac.uk/lseviewofbooks/2024/05/07/book-review-as-gods-among-men-a-history-of-the-rich-in-the-west-guido-alfani/>

<https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691215730/as-gods-among-men?srsId=AfmBOorRuKpPZzucYvD2tXQLINW7R-7n5V4oCCBJXDJ7EeCaoKNX-TP9H>



Um atlântico liberal - Think tanks, Vargas Llosa e a ofensiva de direita na América Latina, María Julia Giménez. Editora Unicamp, 2024

Nos últimos anos, o cenário político latino-americano tem registrado um novo avanço das direitas e o reposicionamento da agenda liberal abrindo a numerosas perguntas e análises dentro e fora do mundo acadêmico, após o início de século marcado pelo ciclo de governos progressistas

em vários países da região. O objetivo deste livro é contribuir ao debate com um estudo das ações empreendidas por think tanks liberais a partir de redes transnacionais atuantes na América Latina, tomando o caso da Fundación Internacional para la Libertad (FIL) entre 2002 e 2016.



Coyuntura en la red

El triunfo de Donald Trump abrió la discusión: ¿las élites están traicionando a la democracia?

[Lo que los votantes de Estados Unidos le están diciendo a las élites - The New York Times](#)

panamarevista.com/la-traicion-de-las-elites/

[El triunfo de Trump y la sorpresa de las elites](#)

[¿Cómo pudimos creer que ganaría Kamala? - Revista Anfibia](#)



Boletín del Grupo de Trabajo
Élites económicas, estado y desigualdad

Número 1 · Noviembre 2024